

## CUBA

Cuba, con una población de unos 11,4 millones de habitantes, es un estado totalitario encabezado por Raúl Castro, que ocupa los cargos de Jefe de Estado, Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Si bien la Constitución reconoce a la Asamblea Nacional (que consta de una sola cámara) como la autoridad suprema, el mismo documento reconoce al Partido Comunista (PC) como el único partido legal y la "fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado". Fidel Castro, que cedió el poder a su hermano en 2008, sigue siendo Primer Secretario del PC. Las elecciones de enero del 2008 a la Asamblea Nacional no fueron justas ni libres. Todos los candidatos debieron ser aprobados previamente por una comisión de candidaturas del PC, con el resultado de que los candidatos del PC y sus aliados obtuvieron el 98,7 por ciento de los votos y 607 de los 614 escaños en la Asamblea Nacional. Las fuerzas de seguridad están subordinadas a las autoridades civiles.

El Gobierno negó a sus ciudadanos el derecho a cambiar de gobierno. Además, llegaron noticias de las siguientes infracciones de los derechos humanos: hostigamiento, golpizas y amenazas contra los opositores políticos por parte de turbas reunidas por el Gobierno o por funcionarios de la Seguridad del Estado, que actuaron con impunidad; condiciones de encarcelamiento en extremo duras y peligrosas para la vida, incluida la negativa a prestar asistencia médica en ciertos casos; detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y de afiliados a asociaciones profesionales independientes; enjuiciamientos selectivos y negación de juicio justo. Las autoridades interfirieron en la vida privada de las personas y hubo una vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas. También se notaron limitaciones graves a la libertad de expresión y de prensa; negación de la libertad de reunión y asociación pacíficas; restricciones a la libertad de circulación, y limitación de la libertad de culto. El Gobierno se negó a reconocer a los grupos independientes de defensa de los derechos humanos o a permitirles que funcionaran legalmente. Además, el Gobierno siguió restringiendo seriamente los derechos de los trabajadores, entre ellos, el derecho a formar sindicatos independientes. El Gobierno liberó a más de 40 presos políticos, entre ellos, a muchos activistas conocidos de defensa de los derechos humanos que fueron arrestados en 2003. Muchos de ellos

fueron liberados a condición de que salieran del país en el curso del período del presente informe, pero el Gobierno autorizó a uno de ellos a permanecer en el país. Estas liberaciones, en las que actuó de mediadora la Iglesia Católica de Cuba, ocurrieron después de las protestas callejeras y de las intensas críticas internacionales que siguieron a la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo en el curso de una huelga de hambre. En sus conversaciones con la iglesia, el Gobierno indicó que proyecta liberar próximamente a todos los presos políticos.

## **RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS**

Sección 1 Respeto por la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometido a:

a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

No se tuvo conocimiento de que el Gobierno ni sus agentes cometieran homicidios arbitrarios ni ilegales.

b. Desapariciones

No hubo informes de desaparecidos por motivos políticos.

c. Torturas, castigos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe el trato abusivo de los detenidos y presos; sin embargo, hubo notificaciones verificables de que las fuerzas de seguridad hostigaron y a veces agredieron físicamente a los defensores de los derechos humanos y de la democracia, disidentes, detenidos y presos, y de que lo hicieron impunemente. Algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos, a veces a manos de otros reclusos con la anuencia de los guardias, o largos períodos de estancia en celdas de aislamiento.

El Gobierno continuó organizando “actos de repudio”, es decir, protestas para hostigar a los desafectos y a sus familias. Aunque el Gobierno insistía en que esas turbas eran espontáneas, los participantes a menudo llegaban en vehículos oficiales o los alistaban los dirigentes locales del PC de escuelas o lugares de trabajo cercanos. En casos extremos las turbas

organizadas por el Gobierno agredieron a las víctimas o dañaron sus hogares o bienes. A menudo estaban presentes agentes encubiertos de la policía y del Directorio General de Seguridad del Estado (DGSE), los cuales coordinaban las operaciones con los jefes de la turba. Los funcionarios presentes en estos casos no detuvieron a los que habían agredido físicamente a las víctimas ni hicieron caso de las quejas de los agredidos. En más de una ocasión, los funcionarios también golpearon a las víctimas.

Muchos de estos “actos de repudio” organizados por el Estado se dirigieron contra las Damas de Blanco, un grupo principalmente femenino de parientes y partidarios de los pesos políticos, muchos de los cuales fueron detenidos en la primavera de 2003.

En la semana que precedía al 18 de marzo, aniversario de las detenciones de 2003, las Damas de Blanco organizaron desfiles diarios para conmemorar esa fecha. El 16 de marzo, el Gobierno transportó a unos 100 contra manifestantes que rodearon a las Damas de Blanco, insultándolas y profiriendo consignas pro gubernamentales. El 17 de marzo, las Damas de Blanco intentaron desfilas por un vecindario de los suburbios de La Habana. En pleno desfile de las Damas, llegaron en autobús unos 300 manifestantes pro gubernamentales, los que rodearon a las Damas de Blanco, y las insultaron y agredieron físicamente. Unos policías sin uniformar envolvieron a las Damas de Blanco, protegiéndolas de los peores golpes, pero al mismo tiempo se observó que unos agentes de la seguridad del estado coordinaban el asalto con los jefes de la turba. Al final, la turba obstruyó enteramente el desfile de las Damas de Blanco, y la policía las arrastró a un autobús que se había colocado a la espera. Unos diplomáticos extranjeros también observaron que los agentes de seguridad separaban a un pariente de las Damas y lo pateaban y golpeaban repetidas veces. Todos los participantes en el desfile fueron detenidos brevemente y luego liberados sin cargos.

En el primer semestre del año, el Gobierno también trató de impedir que las Damas de Blanco efectuaran su desfile de todas las semanas después de la misa dominical, lo que llevaban haciendo sin obstáculo a partir de la detención de sus esposos en 2003. Esas confrontaciones se agravaron en las semanas posteriores, a medida que aumentaba de número y de intensidad la muchedumbre de contra manifestantes, mientras la policía impedía que casi todas las Damas de Blanco consiguieran llegar a la

iglesia. El 18 de abril, los partidarios del Gobierno rodearon a las Damas de Blanco a su salida de la iglesia y evitaron su desfile, profiriéndoles insultos y obscenidades mientras golpeaban ruidosamente diversos utensilios de cocina. Al salir de la iglesia el 25 de abril, las Damas de Blanco se vieron rodeadas otra vez; en esta ocasión las obligaron a meterse en un parque cercano, donde fueron agredidas y sometidas a insultos sexuales y raciales y retenidas en el lugar durante más de siete horas. Entonces intervino la seguridad del Estado y las obligó a subirse a un autobús público. Estos altercados concluyeron la semana siguiente, cuando el presidente Castro aseguró al cardenal Jaime Ortega que se permitiría que las Damas de Blanco reanudaran sus desfiles dominicales.

### Condiciones en las prisiones y los centros de detención

Las condiciones en los presidios continuaron siendo severas y peligrosas para la vida. El Gobierno no permitía la vigilancia independiente de las condiciones carcelarias por las asociaciones internacionales o nacionales de derechos humanos. La escasez de comida fue generalizada; a menudo los alimentos se echaron a perder o infestaron de insectos o alimañas. Muchos presos dependieron de los paquetes familiares de hasta 14 kilogramos de comida y otros productos esenciales que les llevaban los parientes a cada visita.

En las celdas faltó agua, higiene, espacio, luz, ventilación y control de la temperatura. El agua corriente era poco común, y cuando la había, generalmente sólo corría por un rato en la mañana y otro en la noche. El agua para beber y bañarse era maloliente y a menudo estaba contaminada por parásitos. Según muchos presos, sólo les daban un pequeño vaso de agua por día, aun estando confinados en celdas donde reinaba un calor insostenible en el verano. Las infecciones por ratas, insectos y otras plagas fueron comunes. Hubo informes específicos sobre la presencia de ratas, cucarachas, pulgas, piojos, chinches, hormigas urticantes, moscas y mosquitos. Los presos informaron que no tenían acceso a la asistencia médica y dental, incluso la de urgencia. Los presos se declararon en huelga de hambre a lo largo del año para reclamar tratamiento médico.

Hubo informes frecuentes de palizas a los presos, tanto propinadas por funcionarios carcelarios como por otros reclusos. Hubo informes de agresiones sexuales entre presos, consecuencia, por lo común, de la falta de vigilancia por los celadores, y por lo menos una noticia de violación por

los carceleros. Los abusos sexuales, sin embargo, no parecieron ser frecuentes.

El 24 de febrero, falleció el preso político Orlando Zapata Tamayo después de once semanas de huelga de hambre. Su familia sostuvo que las autoridades le negaron los cuidados indicados y la asistencia médica durante su huelga de hambre. Las autoridades, entre ellas el presidente Castro, insistieron en que Zapata tuvo el tratamiento adecuado y que se le habían informado de los riesgos de su ayuno prolongado.

El 12 de junio, el Gobierno liberó al preso político Ariel Sigler Amaya, que sufría de paraplejía a consecuencia de una desnutrición prolongada, después de haber estado encarcelado siete años. El 28 de julio, Sigler Amaya salió de Cuba para recibir tratamiento médico en el exterior.

Las celdas en los presidios estaban hacinadas, lo que obligaba a los presos a dormir en el suelo y les limitaba el movimiento durante el día. A menudo los presos dormían en plataformas de cemento sin colchón. Cuando los había, los colchones eran delgados y a menudo estaban infestados de plagas. Los presos informaron que la ligera mejora que notó a fines de 2009 (aumento en el reparto de colchones y cierto alivio del hacinamiento) no continuó durante el año.

Los presos y sus familiares, así como las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que la asistencia médica fue inadecuada, lo cual causó o agravó la hipertensión, la diabetes, las afecciones al corazón, el asma, los trastornos cutáneos, las infecciones, los trastornos digestivos, la conjuntivitis y otras afecciones. Los presos también informaron sobre brotes de dengue, tuberculosis y hepatitis. El personal sanitario de las prisiones a menudo empleaba jeringas usadas, pese a la presencia de enfermedades contagiosas entre los reclusos.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) informó de numerosas muertes carcelarias debidas a ataques al corazón, ataques de asma y otras afecciones crónicas, así como a suicidios.

El Gobierno no dio a conocer el número de presos ni de detenidos. Tampoco informó sobre el número ni la ubicación de los centros de detención, los cuales incluyeron no solo las prisiones sino también los

campamentos de trabajo y otros reclusorios. Los cálculos aproximados extraoficiales de la población de presos y detenidos varían muchísimo, de 30.000 a 80.000. Los hombres y las mujeres ocuparon diferentes prisiones e instalaciones de detención policial. Las mujeres manifestaron que sus condiciones eran tan deficientes como las de los hombres. Además, las mujeres denunciaron la falta de acceso a los productos de higiene femenina y a los cuidados prenatales adecuados. El Gobierno no reveló información alguna sobre el trato de los menores en las prisiones y centros de detención de menores y de adultos. Se informó que en las cárceles de máxima seguridad había jóvenes de apenas 15 años de edad.

Los presos políticos y los comunes fueron sometidos a las mismas condiciones. Por negarse a llevar los uniformes normales de los presidiarios, a los presos políticos se les negaron a menudo ciertos privilegios, como el acceso a la biblioteca de la cárcel y a la disminución prevista en la severidad de la pena (por ejemplo, el traslado de una prisión de máxima seguridad a una de mediana seguridad o a un campamento de trabajo). Los presos políticos también informaron que los otros reclusos a veces los amenazaban u hostigaban, supuestamente por orden de las autoridades carcelarias.

Según los presos, la incomunicación era castigo común de la mala conducta; algunos de ellos fueron aislados durante meses o incluso años por cada castigo. Por lo general, los presos incomunicados tuvieron restringidas las visitas familiares. A veces se encarceló a presos cuerdos en las mismas celdas ocupadas por los perturbados.

Los presos y los detenidos antes de juicio tuvieron derecho a recibir visitas, aunque los parientes de ciertos presos políticos informaron que a veces las autoridades cancelaban arbitrariamente las visitas programadas. Se permitió a los presos cierta observancia religiosa. La Iglesia Católica y el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) informaron que tuvieron más acceso a los presos durante el período de este informe. En 2009, las iglesias pertenecientes al CIC comenzaron a ofrecer servicios regulares en ciertas cárceles, principalmente las de la provincia de La Habana. Según el CIC, el Gobierno permitió que continuara la expansión de este programa durante el año, y se ofrecieron servicios religiosos en casi todas las provincias o en todas. Como sucedió en 2009, llegaron informes aislados de que las autoridades carcelarias no informaban a los reclusos de que tenían derecho a asistir a los servicios religiosos, que se demoraban

meses en responder a esas solicitudes y que limitaban las visitas a no más de dos o tres al año.

Por ley, los presos y detenidos pueden pedir desagravios con respecto a las condiciones carcelarias y a la contravención de los procedimientos, por ejemplo, contra la continuación de la reclusión después de cumplido el plazo de la condena. Según los presos, las autoridades a menudo se negaron a aceptar las quejas o no las atendieron una vez presentadas. Sin embargo, la familia de un preso político informó que las autoridades centrales solucionaron sus quejas con respecto a las condiciones de vida en la cárcel, cuando las autoridades locales no lo habían hecho. En otro caso, las autoridades centrales ordenaron a las de una cárcel que no retirara los privilegios a un preso político que se negaba a llevar el uniforme de presidiario. No está claro si el Gobierno investigó o vigiló las quejas por condiciones inhumanas. Si hubo investigaciones, sus resultados no se publicaron.

Aunque el Gobierno había invitado al Relator Especial de las Naciones Unidas para la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes para que efectuara un viaje indagatorio por Cuba; esa visita no ocurrió durante el año. En junio, el relator especial Manfred Nowak anunció que el Gobierno no le indicó la fecha de la visita, a pesar de que intentó llegar a un acuerdo varias veces. El señor Nowak no pudo efectuar esa misión antes de que caducara su mandato el 31 de octubre.

#### d. Arrestos o detenciones arbitrarios

El código de procedimiento penal rige, en líneas generales, los arrestos y los procedimientos de investigación y enjuiciamiento. La policía para a los ciudadanos para pedirles la documentación y efectuar arrestos y registros casi enteramente a su criterio.

La ley dispone que la policía presente a los sospechosos un acto de detención suscrito, en el que figuren los fundamentos, la fecha y la ubicación de cualquier detención en una estación policial, y la lista de los efectos personales que se hayan incautado durante el registro. En realidad, la policía en general incumplió estos requisitos durante los arrestos y registros. Las paradas y los registros arbitrarios fueron más comunes en las zonas urbanas y en los puntos de control oficiales situados a las entradas de las provincias y los municipios. Al parecer, la policía paró

e interrogó con especial frecuencia a los afrocubanos, especialmente en La Habana y en las zonas turísticas.

Los agentes de la policía y la seguridad a menudo se valieron de detenciones breves para impedir que los presuntos opositores se reunieran libremente. Esas detenciones solían durar de varias horas a varios días. Por ejemplo, el 10 de diciembre la policía detuvo a decenas de activistas políticos que intentaban participar en una manifestación por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Casi todos ellos fueron liberados a las pocas horas, una vez que se impidió la manifestación.

Según la CCDHRN, el Gobierno, para hostigar a los opositores, dependió cada vez más de las detenciones preventivas breves en lugar del enjuiciamiento y la reclusión, y mencionó que hubo al menos 2074 detenciones breves durante el año, en lugar de menos de 900 en 2009. Disminuyó el número de castigos a los opositores por medio de encarcelamientos prolongados, según la CCDHRN. Sin embargo, llegaron noticias de varios casos hacia fines de año en los que se detuvo a varios activistas de los derechos humanos y que seguían reclusos a finales de 2010.

El 25 de diciembre, los hermanos Marcos Maikel Lima Cruz y Antonio Michel Lima Cruz fueron detenidos, supuestamente por profanar la bandera cubana y trastornar el orden público. Las detenciones ocurrieron tras una noche de festejos en los que presuntamente bailaron en la calle con una bandera cubana al son de la música de una banda popular muy conocida que a veces critica al Gobierno. El 9 de diciembre, el activista Néstor Rodríguez Lobaina, residente en Guantánamo, fue detenido cuando se preparaba para participar en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos al día siguiente. El 13 de diciembre, Rodríguez fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En noviembre, el periodista autónomo José Agramonte Leyva fue detenido en Camagüey. Al final del período del presente informe, los cuatro permanecían detenidos sin cargos.

La detención domiciliaria sin mandamiento judicial fue otro de los métodos que el Gobierno empleó a menudo para coartar la libertad de reunión. Según los partidarios de las Damas de Blanco, en varias ocasiones en abril se les dijo que se les detendría si trataban de incorporarse a las manifestaciones públicas. En la provincia de Holguín, la madre y los

partidarios de Orlando Zapata Tamayo, preso de conciencia fallecido en una huelga de hambre, informaron que durante la segunda mitad del año los agentes de la seguridad del Estado, la policía uniformada y las turbas les impidieron visitar la vecina iglesia católica y la tumba de Zapata, para lo cual bloquearon su vecindario. La turba a menudo se dirigió a la familia de Zapata con insultos y ofensas étnicas, y algunos de sus partidarios fueron agredidos físicamente. En las detenciones domiciliarias, se apostaban frente a las casas o en las esquinas próximas agentes sin uniforme de la seguridad del Estado o policías uniformados.

### Función de la policía y del aparato de seguridad

El Ministerio del Interior controló a la policía, las fuerzas de seguridad nacional y el sistema penitenciario. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) es el órgano coercitivo principal y sus investigaciones de los delitos comunes fueron moderadamente eficaces. Las unidades especializadas del servicio de Seguridad del Estado, adscritas al Ministerio del Interior, están encargadas de la vigilancia, infiltración y supresión de los grupos de oposición política. La PNR desempeñó una función auxiliar, realizando allanamientos de domicilios, deteniendo a los buscados por el Ministerio del Interior y proporcionando instalaciones para interrogatorios a los agentes de la seguridad del Estado.

La policía solía infringir impunemente las leyes de procedimiento y a menudo no proporcionó a los ciudadanos la documentación que se necesita legalmente o se negó a proporcionarla, especialmente durante las detenciones y los registros arbitrarios. Las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad en la comisión de numerosas infracciones graves de los derechos humanos y civiles. Si bien la deontología de la PNR y los reglamentos del Ministerio del Interior prohíben la brutalidad, las fuerzas de seguridad seguían empleando tácticas agresivas y abusivas físicamente. El Gobierno no declaró que hubiera investigaciones durante el año sobre la mala conducta de la policía.

Aunque la ley de procedimiento penal prohíbe la coacción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad dependieron habitualmente de las amenazas y el hostigamiento en los interrogatorios. Según los detenidos, los agentes los amenazaron con largos plazos de detención o la pérdida de la tutela de los hijos o la

negación del permiso de salida del país, y les hicieron insinuaciones intimidatorias, por ejemplo, que un pariente anciano pudiera sufrir un accidente o que un hijo tal vez no aprobara los exámenes de fin de año.

Por ejemplo, durante una detención del 1 de diciembre, los agentes de la seguridad del Estado manifestaron al ex preso político Darsi Ferrer y a su esposa que si seguían su actividad disidente, el Gobierno pudiera asumir la tutela de su hijo de nueve años.

No se dispuso de mecanismos para investigar los ultrajes del Gobierno.

#### Los procedimientos de arresto y el trato durante la detención

El código de procedimiento penal rige en general las detenciones y los procedimientos previos al juicio y del juicio en sí, incluidas las detenciones mientras se investiga y las anteriores al juicio. Después de la detención, la policía tiene un plazo de 24 horas para presentar una denuncia penal a un instructor de la policía. El instructor tiene entonces 72 horas para investigar y preparar un informe para el fiscal. El fiscal cuenta con otras 72 horas para recomendar o no al tribunal pertinente la iniciación de una investigación penal.

Los detenidos no tienen derecho a asesoramiento jurídico durante estos plazos. Por ley, después de 168 horas de detención, se debe informar al detenido de la razón por la que ha sido arrestado e investigado; sólo entonces tiene derecho a la representación jurídica. Los detenidos que hayan sido enjuiciados deben contratar a un representante jurídico en el plazo de cinco días del enjuiciamiento; de lo contrario, el Estado puede nombrarles un abogado. Los enjuiciados pueden salir en libertad bajo fianza, quedar bajo arresto domiciliario o estar detenidos mientras continúa la investigación.

En la práctica, sin embargo, muchos de esos procedimientos a menudo no se tienen en cuenta. Con frecuencia, los sospechosos están detenidos más de las 168 horas sin que se les informe de los motivos de la detención o se les proporcione un abogado. Valiéndose de una encuesta entre los presos efectuada en 2009 y 2010, un disidente conocido informó que el 64% de los detenidos antes de juicio en el penitenciario donde estaba recluido pasaron semanas e incluso meses sin ver a un abogado o sin que siquiera se les informara de las acusaciones que pesaban en su contra.

Una vez que el acusado cuenta con un abogado, la defensa tiene cinco días para responder a la acusación, después de lo cual se suele fijar la fecha del juicio. Llegaron muchos informes de que los acusados que cuentan con defensores públicos sólo se reúnen con sus abogados algunos minutos antes del comienzo del juicio. Los fiscales pueden exigir juicios sumarios en “circunstancias extraordinarias” y cuando se trata de delitos contra la seguridad del Estado.

La libertad bajo fianza es posible, pero no se suele conceder en causas por presunta actividad antigubernamental. El tiempo que se pase detenido en espera de juicio se descuenta de la condena.

A los detenidos se les puede interrogar en cualquier momento mientras estén detenido y no tienen derecho a pedir la presencia de un abogado. Tienen derecho a guardar silencio pero los agentes no están obligados legalmente a informarles de ese derecho.

Por ley, los investigadores deben terminar sus investigaciones penales en el plazo de 60 días, pero los fiscales pueden concederles dos prórrogas de 60 días cada una, previa solicitud, para contar con un total de 180 días de tiempo de investigación. Este plazo puede, sin embargo, extenderlo aún más el tribunal competente en “circunstancias extraordinarias” y previa solicitud especial del fiscal. En ese caso ya no se han fijado más requisitos jurídicos para concluir la investigación o enjuiciar al detenido. A los detenidos a veces se les ha tenido en reclusión por investigación durante meses o años, tanto en casos políticos como apolíticos. En los casos apolíticos las demoras se debieron en muchos casos a la ineficacia de la burocracia, la falta de verificación de los excesos policiales, fiscales o judiciales.

Alan Gross, extranjero dedicado a labores de desarrollo, fue detenido en diciembre de 2009 y a fin de año llevaba más de doce meses de reclusión sin que se le hubiera informado de los cargos que había en su contra ni de haber comparecido ante el tribunal. Darsi Ferrer estuvo recluido 11 meses antes de haber sido enjuiciado, juzgado, condenado, sentenciado y puesto en libertad por el tiempo que había estado recluido: todo ello el mismo día, el 21 de junio. En agosto, los fiscales enjuiciaron a los disidentes políticos Ihosvani Suris de la Torre, Santiago Padrón Quintero, y Máximo Pradera Valdez, que habían estado detenidos sin cargos desde 2001.

e. Negación de juicio público e imparcial

Si bien la Constitución dispone la independencia de los tribunales, los subordina a los requisitos del Estado socialista. La Asamblea Nacional designaba a todos los jueces y por su intermedio el Estado ejercía una influencia casi total sobre los tribunales.

Hay tribunales civiles a los niveles municipal, provincial y de Corte Suprema. Los tribunales militares, regidos por una legislación especial, asumieron jurisdicción sobre ciertas causas “contrarrevolucionarias” (casi siempre políticas). Los tribunales militares también tenían competencia sobre los civiles si alguno de los acusados fuera integrante de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales u otro servicio coercitivo. En esos tribunales los acusados tienen el derecho a conocer los cargos en su contra, tener acceso a un abogado y apelar.

Procedimientos de juicio

Las garantías legales se aplicaron por igual a todos los ciudadanos y a los extranjeros, pero a menudo los tribunales no respetaron ni cumplieron esas garantías. La ley presume que el acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad, pero a menudo, en realidad las autoridades hicieron caso omiso de este principio y la carga de la prueba cayó más en la demostración de inocencia por la defensa que en la demostración de culpabilidad por el fiscal.

Los defendidos suelen tener derecho a un juicio público pero los juicios de motivación política a menudo se celebraron en secreto, como ocurrió cuando se alegaban excepciones por delitos contra la seguridad del estado o por “circunstancias extraordinarias”. La ley no prevé los juicios por jurado. Casi todas las causas se juzgaron en menos de un día.

La ley dispone que el acusado tiene derecho a estar presente en el juicio y exige que esté representado por un abogado, si es necesario, a costas públicas. Los abogados de la defensa tienen derecho a repreguntar a los testigos del Estado, y a presentar testigos y pruebas de parte de los acusados.

Los criterios para la presentación de pruebas eran a menudo arbitrarios y discriminatorios. Según numerosos informes, los fiscales solían presentar pruebas improcedentes o inciertas, por ejemplo, testimonio acerca de los antecedentes revolucionarios del acusado.

Los abogados defensores tienen derecho a examinar el expediente policial en cualquier momento, a menos que la investigación entrañe “delitos contra la seguridad del Estado”. En estos casos, los abogados defensores no tenían acceso al expediente mientras no se hubieran formulado los cargos. En realidad, según informaban muchos detenidos, sus abogados encontraban dificultades en conseguir acceso a los documentos, a causa de obstáculos burocráticos y administrativos. Los abogados de los detenidos por razones políticas informaron que a menudo hallaban aún mayores dificultades en tener acceso a los expedientes de sus defendidos.

El Código Penal define el concepto de “posible peligrosidad” como “la inclinación especial de una persona a cometer delitos, demostrada por una conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas”. Las autoridades, por lo general, aplicaban esta ley a las prostitutas, los alcohólicos, los jóvenes que no se presentaban a los centros de trabajo, y a los que reincidían en infringir las leyes que limitaban el cambio de domicilio. La CCDHRN calculó que entre 200 y 300 personas fueron condenadas por “posible peligrosidad” durante el período del presente informe.

El 15 de septiembre, Yanisleidys Ramírez Teruel, de Ciego de Ávila, de veinticinco años de edad, fue condenada a cuatro años de reclusión por peligrosidad. Según los documentos del juicio, el fiscal alegaba que desde el 23 de julio, Ramírez había sostenido relaciones sexuales con extranjeros en La Habana “con el fin de obtener beneficios económicos”. Sus familiares informaron que Ramírez vivía en La Habana con su tía y que ella y sus parientes se oponían al Gobierno desde hacía tiempo. También observaron que durante el interrogatorio al que fue sometida Ramírez antes del juicio, las preguntas que se le hicieron se concentraron en sus relaciones con diversos grupos de la oposición política.

Al abogado defensor de Ramírez se le dieron 13 minutos antes del juicio para estudiar las pruebas del fiscal y conversar con la acusada. Ya que la condena por peligrosidad se considera una sanción “prepenal”, la ley no obliga a que se presenten pruebas de la comisión de un delito para

condenar al acusado. El tribunal, en su resolución, repitió los alegatos del fiscal y manifestó que como Ramírez no había dado muestras de un “cambio positivo” en su actitud, a pesar de haber tenido dos reuniones con las autoridades, “era necesario retirarla de su ambiente actual para reeducarla y posteriormente, reintegrarla a la sociedad”. El tribunal entonces la condenó a cuatro años en un “Centro Especializado de Trabajo o Estudio” (o sea, un” campamento de reeducación”). A Ramírez se le dio un plazo de tres días para apelar la condena; su apelación fue denegada el 24 de septiembre, tras una vista de 30 minutos.

La ley reconoce el derecho de apelación en los tribunales municipales, pero en los tribunales provinciales lo limita a casos de encarcelamiento prolongado o de pena capital. En diciembre, por ejemplo, la Corte Suprema conmutó en apelación la pena de muerte de dos ciudadanos salvadoreños por cadena perpetua.

#### Presos y detenidos por motivos políticos

Durante el año, la Iglesia Católica medió en la liberación de decenas de presos políticos y de conciencia. El Gobierno manifestó que no sólo liberaría a los últimos 52 presos políticos que habían sido detenidos en marzo de 2003, sino que excarcelaría a todos los presos políticos, entre ellos, a decenas de activistas de la sociedad civil, como el periodista independiente Santiago du Bouchet Hernández, detenido en abril de 2009, y Agustín Cervantes, dirigente del Proyecto Varela del Movimiento de Liberación Cristiana, detenido en septiembre de 2009.

A fin de año, la CCDHRN informó que quedaban encarcelados por lo menos 105 presos políticos, comparados con 194 a fines de 2009. El Gobierno siguió negando la existencia de presos políticos e insistió en que todos los presos del país habían sido condenados justamente. Las ONG internacionales y nacionales y los dirigentes de la oposición observaron que la ley penaliza incluso los actos o las expresiones pacíficas de oposición al Gobierno.

A los presos políticos se les acusaba de delitos como “ayudar a una potencia extranjera”, “distribuir propaganda extranjera”, “desacato a la autoridad”, “sabotaje”, y “contravención de la seguridad nacional”. Otros fueron condenados por haber tratado de salir del país ilícitamente, por agresión o por peligrosidad social.

La falta de transparencia oficial y la infracción sistemática del derecho al proceso legal establecido ocultaban la índole verdadera de los enjuiciamientos y las investigaciones penales y hacen posible que el Gobierno enjuicie y condene a los defensores de los derechos humanos por delitos comunes. Esta cuestión sigue complicando los intentos de los observadores de calcular el número de presos políticos.

A los presos políticos se les negaban las protecciones que se otorgan a otros presos y detenidos. En particular, a menudo se les negaba la pronta libertad bajo palabra o el traslado a cárceles de seguridad menos rigurosa, ventajas que se concedían con frecuencia a los otros presos. A los presos políticos se les negaban por lo general las visitas a la familia, las clases en la cárcel, las llamadas telefónicas y a veces, las visitas de la familia. Algunos presos políticos se negaban a llevar el uniforme de los reclusos. Aunque las autoridades carcelarias solían castigar esas negativas, muchos presos informaron que a la larga les dieron permiso para llevar la ropa de su elección.

El Gobierno siguió negando acceso a los presos políticos por parte de las asociaciones humanitarias internacionales. Sin embargo, muchos presos políticos pudieron comunicar información sobre sus condiciones de vida por medio de llamadas telefónicas a los observadores de los derechos humanos y de informes a sus familiares.-

### Procedimientos y recursos judiciales civiles

Hay tribunales civiles al nivel municipal, provincial y de la Corta Suprema, los cuales tratan los asuntos civiles, administrativos, laborales y económicos, por ejemplo, la tutela de menores, la anulación de matrimonios, las controversias contractuales, las reivindicaciones por perjuicios económicos, las expropiaciones forzosas y otros asuntos que se diriman entre personas naturales o jurídicas, a condición de que al menos una de las partes sea cubana. Los tribunales civiles, como todos los tribunales del país, no cuentan con una judicatura independiente o imparcial ni ofrecen garantías eficaces de procedimiento. Aunque es legalmente posible pretender desagravios judiciales por medio de los tribunales civiles por la infracción de resoluciones administrativas, la ineficacia general de los procedimientos y de la burocracia a menudo demora o debilita el cumplimiento de las resoluciones administrativas y de

los mandamientos de los tribunales civiles. Ningún tribunal permite que se entablen pleitos por infracciones de los derechos humanos.

- f. Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia

La Constitución dispone la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia de los ciudadanos. La policía debe tener una orden de allanamiento firmada por el fiscal o el juez antes de entrar en el domicilio o de efectuar el registro. En realidad, la policía solía registrar los hogares y confiscar efectos personales sin contar con la documentación exigible legalmente. El Gobierno también vigilaba física y electrónicamente a los activistas de la sociedad civil. El Ministerio del Interior empleaba un sistema de informadores y de comités de vecinos (los llamados “Comités de Defensa de la Revolución”, CDR) para vigilar a la oposición al Gobierno e informar de sus actividades. Los agentes de la DGSE hostigaban y vigilaban de vez en cuando a periodistas y diplomáticos extranjeros, por ejemplo, por medio de la vigilancia electrónica y del allanamiento subrepticio de sus viviendas.

Para desviar las críticas que surgieron tras el fallecimiento del preso político Orlando Zapata Tamayo, el Gobierno presentó por la televisión estatal unas grabaciones de las reuniones celebradas entre los médicos de Zapata Tamayo y su familia, tomadas sin su conocimiento y utilizadas sin su consentimiento.

El Partido Comunista (PC) es el único partido político reconocido legalmente y el Gobierno reprimía activamente cualquier intento de constituir otros partidos. No hacía falta ser miembro del Partido para conseguir los servicios comunes del Gobierno, como en el racionamiento, la vivienda o la asistencia médica. No obstante, el Gobierno alentaba a la movilización política de las masas y favorecía a los que la practicaban activamente, especialmente cuando se trataba de conceder prestaciones públicas valiosas, como el acceso a la enseñanza superior, las becas, los empleos y otros beneficios especiales.

A veces, los parientes de los disidentes políticos sufrieron represalias. A algunas esposas o hijos de los opositores destacados se les negaron puestos de trabajo por no ser dignos de confianza, se impidió que se

matriculasen en la Universidad y se les denegaron premios académicos o permisos de salida del país y de regreso.

## Sección 2 Respeto por las libertades civiles, incluidas:

### a. La libertad de expresión y de prensa

La Constitución reconoce la libertad de expresión y de prensa en tanto se conforme a los fines de la sociedad socialista. En realidad, el Gobierno toleraba muy poco la crítica pública de los funcionarios o programas oficiales. Las leyes prohíben que se critique a los dirigentes del Gobierno y reparta propaganda antigubernamental, actos que se castigan con penas de tres meses a quince años de reclusión.

El Gobierno fue propietario directo de todos los medios informativos impresos o radiodifundidos, a los cuales controló el PC, que no toleró ninguna independencia editorial. Las noticias y los programas eran casi iguales en todos los medios de información. El control de la información era tan rígido que hasta los medios oficiales se quejaban a veces, como lo demuestra un artículo editorial que apareció brevemente en la página web de un periódico juvenil del PC hasta que fue retirado. El Gobierno también controló casi toda la publicación de libros, y obligó que cada libro tuviera la aprobación del PC antes de que se imprimiera.

El Gobierno no reconoce al periodismo independiente y sometió a algunos periodistas autónomos a prohibiciones de viaje, detenciones, hostigamiento, confiscación de equipo y amenazas de encarcelamiento. Se sabe que a veces los agentes de la DGSE se hicieron pasar por periodistas independientes para allegar información. De los presos políticos que el Gobierno liberó y exilió este año, veinte fueron periodistas independientes antes de su encarcelamiento en 2003; por lo menos otros cinco seguían presos.

Los sacerdotes católicos y otros religiosos pudieron pronunciar sus sermones sin previa aprobación oficial y en ciertos casos, criticaron al Gobierno sin que hubiera represalias. Los sacerdotes y jefes religiosos criticaron abierta y públicamente sin represalias al presidente Castro y a los dirigentes del país en las publicaciones de la iglesia y en entrevistas de prensa, cuestionando abiertamente la reacción de la dirigencia nacional a las críticas y su gestión económica. Las publicaciones católicas de La

Habana y Pinar del Río a menudo contradecían la política y los supuestos oficiales. En febrero, el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) lamentó públicamente la muerte del huelguista de hambre Zapata.

La Iglesia Católica obtuvo permiso para transmitir la Misa de Pascua por las estaciones oficiales, además de la Misa de Navidad que ya se transmite desde hace más de veinte años. El 8 de agosto, el Gobierno también aprobó la transmisión de una misa especial que marcará el comienzo del año de celebración del cuarto centenario de la Virgen de la Caridad, a la cual la Iglesia Católica ha designado santa patrona de Cuba. Además, el Gobierno autorizó al CIC, asociación de Iglesias protestantes de Cuba reconocida por el Gobierno, a presentar una serie de programas de radio de una hora de duración cada uno.

La ley prohíbe el reparto de material impreso de origen extranjero que se considere "contrarrevolucionario" o crítico del Gobierno. En general, no se encontraron revistas ni diarios extranjeros. Los que distribuían material de contenido político, lo que se consideraba que incluía de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fueron hostigados y, en algunos casos, detenidos. El Gobierno siguió interfiriendo en las transmisiones de Radio Martí y Televisión Martí.

El Gobierno a veces impidió que las bibliotecas independientes recibieran materiales del exterior y en alguna ocasión incautó el material donado por Gobiernos extranjeros.

### Libertad de la Internet

El acceso a la Internet está bastante restringido por el Gobierno. Llegaban numerosos informes de que el Gobierno vigilaba el correo electrónico así como la exploración y las salas de charla de la Internet. El Gobierno controlaba todo el acceso a la Internet, a excepción de unos servicios muy limitados que proporcionan unas pocas representaciones diplomáticas y el mercado negro. El Gobierno declaró que el 14% de la población tenía acceso a la Internet, pero en muchos casos ese "acceso" estaba limitado a un "Intranet" nacional que sólo ofrecía correo electrónico o un servicio sumamente limitado de la *web*.

Ya que no hay enlaces al país por medio de fibra óptica, todo el tráfico de Internet pasa por conexiones de línea conmutada o por unas escasas

conexiones de satélite. Excusándose por esas limitaciones, el Gobierno concedió el acceso a la Internet a un grupo selecto muy reducido, consistente principalmente en funcionarios, profesionales establecidos, profesores, estudiantes y artistas. Los demás sólo pueden acceder a servicios restringidos de correo electrónico e Internet por medio de asociaciones juveniles y centros de Internet patrocinados por el Gobierno y regulados y aprobados por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Las autoridades examinaban las exploraciones por Internet de los usuarios autorizados, examinaban y censuraban los correos electrónicos, empleaban filtros de búsqueda de la Internet e impedían el acceso a las páginas de la *web* que consideraban objetables. Muchos grupos de defensa de los derechos humanos manifestaron que las autoridades emplean patrullas móviles para hallar equipo no autorizado de Internet y de televisión por satélite. Cuando la policía descubre a los infractores, les confisca el equipo y los multa.

Si bien la ley no fija penas específicas por el uso de la Internet sin autorización, es ilícito poseer una antena parabólica para tener acceso sin censura a la Internet. En 2008, el Gobierno dio instrucciones a los proveedores de acceso público a la Internet que impidieran el acceso a los sitios “cuyo contenido sea contrario a los intereses sociales y morales o a las normas de la comunidad” o a aplicaciones que “afecten a la integridad o la seguridad del Estado”. El mismo decreto ordenó a los proveedores de la Internet que impidan que se utilice *software* de cifrado (encriptación) y el traslado de archivos cifrados. Pese al acceso restringido, al hostigamiento y a las dificultades que presenta la infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo *blogs* en los cuales a menudo publicaron críticas del Gobierno, con la ayuda de simpatizantes del exterior que frecuentemente establecían y mantenían esos sitios en la Internet. El acceso local a casi todos estos *blogs* estaba impedido.

Los extranjeros y los ciudadanos tenían derecho a comprar tarjetas de acceso a la Internet del proveedor nacional de telecomunicaciones y a utilizar los centros comerciales de los hoteles, donde el acceso a la Internet sólo se podía adquirir en divisas. Ese acceso costaba generalmente de cinco a diez pesos convertibles (\$5,40 a \$10,80) por hora, tarifa que resultaba prohibitiva para la mayoría de los ciudadanos.

## Libertad académica y actos culturales

El Gobierno limitaba las libertades académicas y continuaba controlando los programas de estudio de todas las escuelas y universidades, con lo cual destacaba la importancia de robustecer la “ideología revolucionaria” y la “disciplina”. La mayoría de los docentes se abstenía de reunirse con extranjeros, entre ellos, diplomáticos, periodistas y profesores, sin la previa aprobación del Gobierno; los que podían viajar al extranjero se daban cuenta de que sus actos, si fueran considerados desfavorables desde el punto de vista político, repercutirían negativamente sobre ellos y sus familiares en Cuba.

En un caso de junio que ha llamado mucho la atención, el PC expulsó de sus filas al profesor Esteban Morales, que había publicado un artículo en que trataba de la lacra de la corrupción oficial. Antes de publicar ese artículo, el señor Morales, catedrático de la Universidad de La Habana, había aparecido a menudo en *Mesa Redonda*, el noticiero de la noche de la televisión oficial, pero desde entonces no ha vuelto a figurar en ese programa.

Las bibliotecas públicas exigían una carta oficial de autorización para dar acceso a los libros o a la información.

### b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Si bien la Constitución reconoce ciertos derechos de reunión y de asociación, los condiciona a que no “se ejerzan en contra de la existencia y los objetivos del Estado Socialista”.

#### Libertad de reunión

La ley castiga con pena máxima de tres meses de prisión y multa toda reunión no autorizada de más de tres personas, aunque esas reuniones suelen ser disueltas más que enjuiciadas. El Gobierno no concedió autorización a ninguna manifestación contra el Gobierno ni aprobó reuniones públicas por ningún grupo defensor de los derechos humanos. A principios de año, el Gobierno intentó impedir los desfiles sin permiso de las Damas de Blanco, pero éstas desafiaron de tal modo a las turbas organizadas por el Gobierno que éste, a la larga, tuvo que ceder (véase la sección 1.c.).

Según las asociaciones de la sociedad civil, continuó la supresión del derecho de reunión. El 29 de octubre, unos cuarenta abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos intentaron reunirse en una vivienda particular para debatir los convenios de las Naciones Unidas y las leyes cubanas que afectan a las asociaciones de la sociedad civil. Mucho antes de la hora fijada para la reunión, unos elementos sin uniformar de las fuerzas de seguridad rodearon el edificio y exigieron la documentación a los que pretendían entrar. Con la colaboración de la policía uniformada, varios de los asistentes más conocidos fueron detenidos y conducidos a las comisarías, donde fueron retenidos varias horas y entonces liberados sin cargos.

El Gobierno sigue autorizando las procesiones religiosas para celebrar las fiestas importantes, y al menos dos grupos religiosos han organizado procesiones públicas sin obtener permiso y sin repercusiones.

Según los activistas de los derechos humanos, el Gobierno vigila e interrumpe los servicios telefónicos celulares y alámbricos antes de determinados acontecimientos planificados o de aniversarios importantes vinculados a los derechos humanos.

### Libertad de asociación

El Gobierno negó a sus ciudadanos casi siempre la libertad de asociación y no reconoció a ninguna asociación independiente. La Constitución proscribía toda organización política que no esté reconocida oficialmente. Las autoridades nunca han reconocido a una asociación independiente de defensa de los derechos humanos; sin embargo, varias asociaciones profesionales independientes actuaron como organizaciones no gubernamentales (ONG) aunque sin reconocimiento jurídico.

Las iglesias reconocidas, la entidad humanitaria católica Cáritas, el movimiento masónico y algunas hermandades o asociaciones profesionales fueron las únicas entidades a las que se permitió funcionar fuera de la estructura oficial del Estado, del PC y sus agrupaciones de masas constituidas por el Gobierno. Todos los grupos religiosos son responsables ante la Oficina de Asuntos Religiosos, que es una dependencia oficial y tiene la autoridad de denegar permisos para actividades religiosas y que presionaba a las jerarquías eclesiásticas. Las

autoridades continuaron desoyendo las solicitudes de reconocimiento jurídico de grupos nuevos, entre ellos, los religiosos, los de defensa de los derechos de la mujer y los de los homosexuales, con lo cual sus posibles miembros se exponen a acusaciones de asociación ilícita.

c. Libertad de culto

Para tener una descripción completa de la libertad de culto, sírvase consultar el *Informe Internacional de 2010 sobre la Libertad de Culto* en [www.state.gov/g/drl/irf/rpt](http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt).

d. Libertad de circulación, personas desplazadas en el país, protección de los refugiados y apátridas

La libertad de circulación en el país está seriamente restringida, así como los viajes al exterior y la emigración con derecho de retorno.

El Gobierno limitó estrictamente los viajes por el interior del país y el extranjero, así como la migración interna de las zonas rurales a La Habana. Algunos disidentes informaron que a veces, las autoridades los detenían si pretendían salir de su provincia o los devolvían si llegaban a salir.

La Constitución permite a todos los ciudadanos viajar a cualquier parte del país, pero los cambios de residencia han estado muy restringidos. Las comisiones municipales de vivienda y las autoridades provinciales deben autorizar todos los cambios de residencia. Cualquiera que resida ilegalmente pudiera ser multado y enviado a su lugar de procedencia. Aunque este reglamento fue válido en todo el país, donde más frecuentemente se aplicó fue en La Habana. Miles de personas viven ilegalmente en La Habana, sin acceso a las raciones alimenticias ni al documento de identidad de la ciudad. En ciertos casos, la policía amenazó con enjuiciar por “peligrosidad” a cualquiera que regresara a La Habana después de haber sido expulsado.

El Gobierno restringió tanto la emigración como los viajes temporales al extranjero, principalmente mediante el requisito del permiso de salida y la obligación del presunto emigrantes de desprenderse de casi todos sus bienes, de sus casas inclusive. Aunque el Gobierno permitió la salida de la

mayoría de los que cumplían con los requisitos para poseer la condición de inmigrante o refugiado en otros países, a 300 ciudadanos que habían recibido los documentos de viaje al extranjero durante el año se les negó el permiso de salida. Entre las personas a quienes se les solía negar el permiso de salida estaban el personal médico, los varones en edad militar, el antiguo personal militar o de seguridad y los ciudadanos pertenecientes a la oposición. El Gobierno exigió que los graduados universitarios cumplieran hasta cinco años de servicio social antes de que se les autorizara la salida del país.

El Gobierno denegó los permisos de salida durante varios años a los parientes de los que había emigrado ilegalmente (por ejemplo, a tripulantes de la marina mercante y a personalidades del deporte que desertaron mientras estaban fuera del país). El Gobierno con frecuencia retuvo las visas de salida de los disidentes.

A Juan Almeida, hijo de Juan Almeida Bosque, el difunto dirigente de la Revolución Cuba, se le negó repetidas veces el permiso de salida para conseguir tratamiento médico. A principio de año, inició un *blog* en que relataba las peripecias de otros a quienes se habían negado los permisos de salida; en junio, comenzó una huelga de hambre para exigir el derecho a salir. En agosto, intervino el cardenal Ortega y se autorizó la partida de Almeida.

Las autoridades pueden, por ley, prohibir que una persona vaya a determinada zona o salga de ella durante un período de uno a diez años. En virtud de esa disposición, las autoridades pueden exiliar a cualquiera cuya presencia en un lugar determinado se considere “socialmente peligrosa”.

Los que solicitaban emigrar legalmente también tuvieron que soportar los interrogatorios de la policía, las multas, los registros del domicilio, el hostigamiento y la intimidación oficial, lo que comprendía la pérdida involuntaria del empleo. A veces, se despedía a los empleados del Gobierno que solicitaban emigrar a los Estados Unidos en cuanto se conocían sus proyectos.

Los derechos por concepto de exámenes médicos, permisos de salida, pasaporte e impuestos aeroportuarios sólo se pagan en pesos convertibles, y representan aproximadamente 630 de esos pesos (unos

US\$680) para un adulto, lo que equivalía a casi tres años de salario. Esos derechos significaban grandes privaciones, sobre todo para los emigrantes que habían sido despedidos de sus empleos y no tenían ingresos. Al concluir el año, algunos que deseaban emigrar no pudieron abandonar el país por no haber podido pagar los derechos de salida. Las autoridades, por lo general, desposeían a los presuntos emigrantes y sus familiares de viviendas y de casi todas las pertenencias antes de permitirles abandonar el país.

La ley prevé penas de prisión máximas de tres años o una multa de 300 a 1.000 pesos (aproximadamente, de US\$11 a US\$38) por salidas no autorizadas en lanchas o balsas. En realidad, a la mayoría sólo se les detuvo dos o tres semanas y luego se les multó. A veces, el Gobierno también aplicaba la ley sobre la trata de personas a los posibles emigrantes que organizaban o promovían salidas ilícitas. La ley prevé encarcelamiento de dos a cinco años para los que organizan o promueven la salida ilícita del territorio nacional o incitan a ella. Según cálculos de la CCDHRN, al finalizar el año unos 300 ciudadanos habían sido multados, cumplían condenas o aguardaban juicio por trata de personas. La pena de reclusión fue más común en los casos de los que intentaban fugarse a los Estados Unidos a través de la Base Naval estadounidense de Guantánamo. En virtud de los Acuerdos Migratorios de 1994 entre los Estados Unidos y Cuba, el Gobierno convino en no enjuiciar ni tomar represalias contra los emigrantes que fueran devueltos de aguas internacionales o de los EE.UU. o de la Base Naval de los EE.UU. en Guantánamo, luego de intentar emigrar ilegalmente, siempre y cuando no hubiesen cometido otro delito. Sin embargo, en la práctica, algunos de los repatriados en virtud de los Acuerdos Migratorios experimentaron hostigamiento y discriminación, por ejemplo, multas, expulsión de los estudios y pérdida del empleo.

Por lo general, el Gobierno se negaba a aceptar a sus nacionales cuando se los devolvía del territorio de los Estados Unidos pero fuera de los límites fijados en los Acuerdos Migratorios.

### Protección de los refugiados

Si bien el país no es Parte en la Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967, la Constitución estipula que se otorgue asilo a los perseguidos por sus

ideales o por haber cometido algún acto especificado de carácter político. Aunque el Gobierno no tiene ningún mecanismo oficial para conceder asilo a nacionales extranjeros, en realidad ofreció protección contra la expulsión o el retorno de personas a países donde su vida o libertad estaría amenazada por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política. Esta protección también se extendía a algunos prófugos de la justicia a quienes el Gobierno consideraba refugiados por motivos políticos.

El Gobierno colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras asociaciones humanitarias para proteger a un número reducido de refugiados y solicitantes de asilo, permitiéndoles permanecer en Cuba mientras se procuraba establecerlos en un tercer país. Además, el Gobierno autorizó la permanencia en el país de algunos estudiantes extranjeros de medicina, mientras se investigaban sus temores de que se los perseguiría si regresaban a su patria al final de los estudios.

### Sección 3 Respeto por los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

Pese a que la Constitución estipula la elección directa de los gobiernos provinciales y municipales y de los legisladores de Asamblea Nacional, los ciudadanos no tienen derecho a cambiar de gobierno, y el Gobierno tomaba represalias contra los que trataban de fomentar el cambio político pacífico.

En 2008, la Asamblea Nacional eligió por unanimidad a Raúl Castro como sucesor de su hermano en los cargos de Jefe de Estado y Presidente.

En las elecciones de 2008 a la Asamblea Nacional, el Gobierno prestó su apoyo a una lista única de candidatos aprobada por el Partido Comunista. Los candidatos del PC y sus aliados consiguieron el 98,7% del voto y 607 de los 614 escaños en la Asamblea Nacional.

#### Elecciones y participación política

Los candidatos a los cargos provinciales y nacionales debían aprobarlos previamente las agrupaciones de masas, controladas por el Estado, por ejemplo, las asociaciones del partido para la mujer y la juventud. Un

pequeño grupo de dirigentes se encargaba de seleccionar a los integrantes de más alto nivel, incluidos los presidentes y vicepresidentes del Consejo del Estado así como del Buró Político y del Comité Central del PC, los que luego confirmaban de manera automática los órganos más numerosos, o sea, la Asamblea Nacional o su homólogo del PC. Si bien en principio los no afiliados al PC pudieran competir en las elecciones, en realidad para desempeñar cargos de alto nivel la afiliación al PC era indispensable, a excepción de los escaños en las asambleas municipales, que tenían un carácter más bien simbólico. Todos los candidatos debían ser aprobados por comisiones de candidatura dominadas por el PC, y esas comisiones sólo aprobaban a un candidato por puesto.

Entre los 24 integrantes del Buró Político había una mujer, mientras que de los 107 miembros del Comité Central, las mujeres eran 15. Las mujeres ocupaban ocho escaños de los 27 del Consejo de Estado y 265 de los 614 de la Asamblea Nacional.

Cinco de los puestos del Buró Político fueron ocupados por afrocubanos. Luego de la elección a la Asamblea Nacional en febrero, el Gobierno desglosó su composición racial como sigue: un 64 por ciento de blancos, 19 por ciento de negros y 16 por ciento de raza mixta.

#### Sección 4 Corrupción oficial y transparencia

La ley prevé la imposición de sanciones penales por corrupción oficial y el Gobierno es muy sensible a las acusaciones de corrupción, contra la cual lanza campañas frecuentes. En 2009, estableció el cargo de Contralor, para atacar más eficazmente la lacra creciente de la corrupción. Durante el año, más de una decena de funcionarios de alto nivel y de comerciantes prominentes han sido detenidos por sospechas de corrupción. Los indicadores mundiales de calidad administrativa del Banco Mundial han señalado que en Cuba la corrupción del Gobierno era cada vez mayor.

En el año, llegaban muchos informes de corrupción de la policía y los tribunales. Según diversas fuentes, la policía a veces registra viviendas y vehículos y luego pide sobornos en lugar de hacer detenciones o imponer multas. Según un destacado abogado independiente, algunos fiscales y jueces aceptaban dinero a cambio de aligerar las acusaciones o de dictar condenas más breves.

Los funcionarios no están sujetos a ninguna ley especial que les obligue a revelar sus finanzas personales. La ley estipula el encarcelamiento de tres a ocho años por “enriquecimiento ilícito” de las autoridades o los empleados del Gobierno. Todas las dependencias del Gobierno, especialmente el Ministerio de Auditoría y Control y el Ministerio del Interior, están encargados de combatir la corrupción y la ilegalidad, encargo en que se incluye el enjuiciamiento de funcionarios públicos.

La ley prevé el acceso público a la información oficial pero, en la realidad, las solicitudes de información solían rechazarse automáticamente.

#### Sección 5            Actitud oficial respecto a las investigaciones internacionales y no gubernamentales sobre las presuntas infracciones de los derechos humanos

El Gobierno no reconoció a los grupos internos de derechos humanos ni les permitió funcionar legalmente. Varias asociaciones de defensa de los derechos humanos seguían actuando fuera de la ley, incluidas la CCDHRN, el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil y la Fundación Lawton de Derechos Humanos. El Gobierno sometió a los defensores nacionales de los derechos humanos a la intimidación y el hostigamiento.

No hay ONG independientes reconocidas oficialmente que vigilen los derechos humanos. El Gobierno se negó a reconocer y a reunirse con ninguna ONG no autorizada de vigilancia de los derechos humanos.

El Gobierno siguió denegando a las asociaciones defensoras de los derechos humanos, a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los presos y detenidos.

#### Sección 6            Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad o condición social; sin embargo, los casos de discriminación racial ocurren con frecuencia.

#### Mujeres

La ley penaliza la violación, incluida la violación en el matrimonio, y el Gobierno la hizo cumplir. El Gobierno no divulgó estadísticas durante el año acerca de los arrestos, enjuiciamientos o condenas por violación, y no se dispone de información confiable acerca de la frecuencia de las violaciones.

La ley no reconoce la violencia doméstica como una categoría específica de violencia pero prohíbe amenazar o causar lesiones, incluidas las debidas a la violencia doméstica. Las penas por violencia figuran en las leyes contra la agresión, que van desde multas hasta condenas de prisión de diferente duración, según la gravedad del delito.

Con el fin de concienciar acerca de la violencia doméstica, durante el año el Gobierno siguió realizando campañas en los medios informativos. Además, algunas asociaciones organizadas por el Gobierno celebraron conferencia y colaboraron con diversas comunidades para mejorar los servicios. Según la UNICEF, el Gobierno tenía refugios para mujeres y niños en la mayoría de las poblaciones del país, los cuales contaban con personal capacitado en asistir a las víctimas de la violencia. El Director del Centro de Estudios de la Mujer (parte de la Federación de Mujeres Cubanas, administrada por el Estado) reconoció esta lacra del abuso durante una conferencia que se celebró en noviembre y manifestó el compromiso de su centro a mejorar sus servicios, especialmente en las zonas rurales. Otros participantes en la conferencia debatieron las razones por las que muchas mujeres no notifican los casos de violencia doméstica y los medios para alentar a las mujeres a que lo hagan.

La ley prevé sanciones por acoso sexual, con condenas de tres meses a cinco años de cárcel. El Gobierno no divulgó estadísticas durante el año acerca de arrestos, enjuiciamientos o condenas por delitos relacionados con el acoso sexual.

Las parejas y las mujeres y los hombres tienen derecho a decidir el número, el espaciamiento y la oportunidad del nacimiento de sus hijos, y tuvieron la información y los medios para hacerlo, libres de toda discriminación. Las mujeres y los hombres tuvieron acceso igual a los servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, entre ellas, el VIH. Hubo fácil y extenso acceso a la información sobre anticonceptivos y asistencia calificada en el momento del parto, así como a la asistencia post parto. Según informó en 2008 el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 77% de las mujeres de 15 a 49 años

de edad empleaba alguna forma de control de la natalidad; la UNICEF informó que en 2008 la tasa de mortalidad materna fue de 53 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos.

The law accords women and men equal rights and responsibilities regarding marriage, divorce, raising children, maintaining the home, and pursuing a career. The law grants working mothers preferential access to goods and services. The law provides for equal pay for equal work, and women generally received pay comparable to men for similar work.

La ley establece la igualdad de derechos entre mujeres y hombres con respecto al matrimonio, el divorcio, la crianza de los niños, la manutención del hogar y la dedicación a una carrera. La ley concede a las madres trabajadoras acceso preferente a bienes y servicios. La ley prevé el pago igual por trabajo igual, y por lo general el pago de las mujeres era equiparable al de los hombres por trabajos parecidos.

### Niños

Los nacidos en el territorio nacional son ciudadanos del país.

No se manifiesta ninguna tendencia social al abuso infantil.

Aunque hubo casos de prostitución de menores, no se conocían estadísticas confiables acerca de su alcance. La edad mínima de consentimiento para la actividad sexual es de 16 años. No hay ley de estupro. No obstante, el castigo por violación es mayor cuanto menor es la edad de la víctima. La ley no prohíbe específicamente la pornografía infantil pero prohíbe la producción o distribución de toda clase de material gráfico obsceno, con sanciones que oscilan entre tres meses a un año de prisión, más multa.

El Gobierno, en colaboración con el Gobierno británico y una ONG de la misma nacionalidad, administró un centro en La Habana dedicado al tratamiento de menores víctimas del abuso sexual, incluida la trata. En este centro se empleaban técnicas modernas, entre ellas, la de preparar a los niños para que sean testigos en enjuiciamientos penales.

El país no es Parte en la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores de 1980. Para obtener información

sobre la sustracción internacional de menores cometida por los padres, sírvase consultar el informe anual del Departamento de Estado en la Internet en:

[http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport\\_4308.html](http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html).

### Antisemitismo

Entre 1.000 y 1.500 personas pertenecían a la comunidad judía. No han llegado informes de actos antisemitas ni de otros abusos sociales ni de discriminación por razones de afiliación, creencia o práctica religiosa.

### Trata de personas

Para obtener información sobre la trata de personas, sírvase consultar el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en la Internet en [www.state.gov/g/tip](http://www.state.gov/g/tip).

### Personas con discapacidades

No se conoce ninguna ley que prohíba la discriminación oficial contra las personas discapacitadas en el empleo, la educación, el acceso a la asistencia sanitaria o la prestación de otros servicios estatales; sin embargo, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concede a las personas discapacitadas el derecho a oportunidades iguales de empleo y a pago igual por igual trabajo. No había discriminación oficial contra las personas con discapacidades. La ley no obligaba a que los edificios, las instalaciones y la información sean accesibles a esas personas. En la realidad, las instalaciones y los servicios rara vez resultaban accesibles para los discapacitados.

La Dirección de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación estaba a cargo de la educación y formación de los niños discapacitados. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estado a cargo del Programa de Empleo para las Personas con Discapacidades.

En enero, fallecieron por lo menos 26 pacientes en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), administrado por el Gobierno, cuando las temperaturas bajaron casi al punto de congelación. Algunos residentes de La Habana que conocían el hospital atribuían esas muertes al descuido e

informaron que los pacientes, muchos de ellos ancianos, estaban gravemente desnutridos, vivían en salas sin calefacción y con ventanas rotas, y no tenían abrigos ni frazadas. El 16 de enero, el Ministerio de Salud Pública admitió las defunciones, mencionó “deficiencias” en la administración del hospital y declaró que se enjuiciaría por la vía penal a los funcionarios responsables. El 22 de julio, el presidente Castro sustituyó al Ministro de Salud Pública. Según informes extraoficiales que han llegado a fin de año, el Gobierno está preparando el enjuiciamiento de varias de las personas complicadas en esta causa.

### Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los afrocubanos sufrían a menudo de discriminación racial, incluidas paradas frecuentes y desproporcionadas para verificar sus documentos de identidad y registrar sus pertenencias, y eran objeto de epítetos raciales. Los afrocubanos estaban representados de forma desproporcionada en las barriadas que sufrían las peores condiciones de vivienda y estaban desfavorecidos económicamente,

En una conferencia de julio, un catedrático destacado de la Universidad de La Habana celebró un debate público sobre el racismo y la discriminación contra los afrocubanos, con la participación de estudiantes, dirigentes de la comunidad y vecinos. Los asistentes relataron su experiencia de la discriminación y debatieron planteamientos normativos y educativos que pudieran mejorar la situación.

### Abusos sociales, discriminación y actos de violencia basados en la orientación sexual y en la identidad de género

Oficialmente, no hubo discriminación por orientación sexual en el empleo, la vivienda, la falta de nacionalidad, o el acceso a la educación y la asistencia médica. De todas maneras, persistía la discriminación social por razón de orientación sexual o identidad de género, y la policía a menudo llevó a cabo redadas en las zonas donde se congregaban los homosexuales. En noviembre, los defensores de los derechos de los homosexuales informaron que la policía había efectuado redadas en zonas frecuentadas por homosexuales en Santa Clara y detenido a varios de ellos. A los detenidos los llevó la policía a las comisarías, donde fueron multados y amenazados con enjuiciamiento por peligrosidad social.

En una entrevista de septiembre con la prensa extranjera, el ex presidente Fidel Castro reconoció los malos tratos que habían sufrido los homosexuales y las lesbianas en Cuba en los años 60 y 70, por lo cual aceptó la responsabilidad; en aquellos años, homosexuales y lesbianas se consideraban “contrarrevolucionarios” y a mucho se los recluía en campos de reeducación. Mariela Castro, la hija del Presidente, ha dirigido el Centro Nacional de Educación Sexual y sigue promoviendo abiertamente los derechos de los homosexuales. En enero, reconoció públicamente que sigue discriminándose contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans e instó al PC a adoptar medidas para superar esa aversión. Pese a estos esfuerzos, según varios activistas homosexuales (no vinculados al Gobierno) el Gobierno no hizo lo suficiente para poner fin al hostigamiento de los homosexuales.

#### Otras formas de violencia social o discriminación

Algunos pacientes de VIH/SIDA han sufrido de discriminación en el trabajo o han sido rechazados por sus familias. El Gobierno tuvo cuatro prisiones exclusivamente para los presos contagiados de VIH/SIDA. Algunos cumplían condena por “propagar una epidemia.”

### Sección 7 Derechos de los trabajadores

#### a. El derecho de asociación

La ley no permite a los trabajadores formar ni integrar sindicatos de su elección. El único sindicato legal en el país ha sido la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), a cuyos dirigentes los designa el PC. La función principal de la CTC consistió en garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción fijados por el Gobierno. No negoció colectivamente ni promovió los derechos de los trabajadores ni protegió el derecho a la huelga. La mayoría de los trabajadores tenían que pertenecer a la CTC, y con frecuencia los ascensos se limitaban a los afiliados al PC, que participaban en los desfiles obligatorios, la humillación pública de disidentes y otras actividades organizadas por el Estado.

La CTC ha desempeñado una función principal en la divulgación de información acerca del plan del Gobierno de despedir a un millón de sus empleados, que comenzó en octubre. Estos despidos afectarán a una quinta parte, aproximadamente, de la población activa de Cuba, que es de

unos cinco millones. Aunque la CTC manifiesta que en su función se incluía la defensa de los trabajadores, garantizando la justicia de los trámites de despido, no está claro que hubiera adoptado ninguna medida en ese sentido. Además declaró que "...nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía... ya no será posible aplicar la fórmula de proteger o subsidiar salarialmente de forma indefinida a los trabajadores." **\*\* (CITA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CTC.)**

El Gobierno puede determinar si un trabajador "no es apto" para su trabajo, lo cual resulta en la pérdida de empleo y de oportunidades de trabajo. Algunos han sido considerados no aptos por sus creencias políticas, incluida su negativa a afiliarse al sindicato oficial, o tratar de salir del país ilegalmente. Varios pequeños sindicatos independientes funcionaban sin reconocimiento jurídico, entre ellos, el Sindicato de Conductores de Bicitaxis, la Central Sindical Cristiana y la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (**TAMBIÉN ENCUENTRO EN GOOGLE QUE SE MENCIONA LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE CUBA; SUPONGO QUE SON LO MISMO PERO NO ESTOY SEGURO DE CUÁL ES EL NOMBRE PREFERIBLE; APARECE DE NUEVO EN LA ÚLTIMA PÁGINA**). Esas asociaciones sufrieron el hostigamiento de la policía y la infiltración de agentes del Gobierno, y no pudieron representar a los obreros eficazmente ni trabajar por su causa.

La ley no prevé el derecho a la huelga y no se sabe que hubiera ocurrido ninguna durante el año.

De los 75 disidentes encarcelados en 2003, siete eran dirigentes sindicales independientes. Todos menos uno (Iván Hernández Carillo) han sido liberados durante el año.

- b. El derecho a sindicalizarse y a concertar convenios colectivos de trabajo

La ley no prevé la negociación colectiva entre patronos y empleados, aunque establece un procedimiento complicado para concertar convenios colectivos. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (de la Organización Internacional de Trabajo) siguió

mostrándose disconforme con las restricciones a la negociación y los convenios colectivos, y especialmente, a que sean las autoridades del Gobierno y de la CTC los que tengan la decisión final con respecto a esos convenios. La CTC fue el único sindicato reconocido legalmente, y el Gobierno siguió impidiendo activamente la formación de sindicatos independientes en todos los sectores.

Las embajadas extranjeras y las empresas multinacionales no solían contratar directamente a sus empleados cubanos; estaban obligadas a contratarlos por medio de una dependencia oficial. Las multinacionales fijaron los salarios de sus empleados; esos salarios y las prestaciones correspondieron, en general, a los promedios del país. No se ha fijado un jornal mínimo para el sector privado.

No existían zonas francas para la elaboración de las exportaciones.

c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

Aunque la ley no prohíbe específicamente el trabajo obligatorio o forzoso de los adultos, las disposiciones que vedan la esclavitud, la servidumbre obligatoria y el secuestro se aplicarían al trabajo obligatorio o forzoso. A los presos a menudo se les obliga a trabajar en granjas o en labores agrícolas, metalúrgicas o de la construcción.

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio de los niños, pero a diferencia de años anteriores, no han llegado noticias de que esas labores ocurrieran. Véase también el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en [www.state.gov/g/tip](http://www.state.gov/g/tip).

d. Prohibición de trabajo infantil y la edad mínima de empleo

La edad mínima de empleo es de 17 años, aunque el código laboral permite el empleo de menores de 15 y 16 años de edad, para capacitarlos o para compensar escaseces de mano de obra. Sin embargo, no ha sido corriente que trabajen los menores de 17 años. El código laboral no permite que los jóvenes de 15 y 16 años de edad trabajen más de siete horas al día o 40 horas a la semana o en días feriados. Los jóvenes de 13 a 18 años de edad no pueden emplearse en ciertas ocupaciones peligrosas específicas, como la minería, o en horas de noche.

No se conoce ningún programa oficial que impida el trabajo infantil o que retire a los niños de ese trabajo.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo mensual, que fijaba y hacía cumplir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) era de 225 pesos (unos US\$10). No hay un periodo fijo de examen o modificación del salario mínimo, que fue examinado por última vez en 2005. El MLSS hacía aplicar los requisitos del salario mínimo por conducto de sus oficinas a los niveles nacional, provincial y municipal, y lo hacía eficazmente. El salario mínimo no se aplica en el pequeño sector no estatal. El Gobierno complementó el salario mínimo con educación gratuita, subsidios a la asistencia médica (la paga diaria se reduce en un 40% después del tercer día de estancia en un hospital), vivienda y algunos alimentos subvencionados. Sin embargo, aun con los subsidios, el Gobierno reconoció que el salario mínimo medio de 415 pesos mensuales no basta para mantener un nivel de vida razonable.

Las empresas multinacionales siguen funcionando en determinados sectores, por ejemplo, hoteles, turismo y minería, por medio de empresas conjuntas en las cuales a los empleadores les está prohibido pagar directamente a sus trabajadores, aunque al parecer muchas ellas les conceden pagos complementarios encubiertos. El Gobierno es el contratista exclusivo de la mano de obra y obtiene divisas de las empresas multinacionales. Después, el Gobierno pagaba a los trabajadores en pesos una cantidad que representaba una pequeña fracción de lo que la empresa le había pagado por concepto de gastos laborales. Las empresas multinacionales fijan los salarios de sus empleados.

La semana laboral normal es de 44 horas, pero es más corta en ocupaciones peligrosas como la minería. La ley dispone para los trabajadores un período semanal de descanso de 24 horas. Esas normas se aplicaban eficazmente a los empleados del Estado y a los del pequeño sector no estatal (pero no a los empleados autónomos). La ley no prevé mejor pago por concepto de horas extraordinarias ni prohíbe las horas extraordinarias obligatorias, pero suele limitar el número de horas extraordinarias que se pueden trabajar a 12 por semana o 160 por año. El Ministerio de Trabajo estaba autorizado a fijar otros límites, si fuera necesario. La remuneración por las horas extraordinarias se pagaba en

efectivo según el mismo jornal horario que el normal o se pagaba en horas libres adicionales, especialmente para los que trabajaban directamente en la producción o la prestación de servicios; estas normas no se aplicaban al personal de gerencia. Los obreros se quejaban a menudo de que la remuneración por horas extraordinarias no se les pagaba o se les pagaba con demora. La ley contempla pocas razones para que un obrero se niegue a trabajar horas extraordinarias. Negarse a hacerlo puede tener la consecuencia de que aparezca una anotación en el expediente laboral del empleado, lo cual pondría en peligro la aprobación de sus solicitudes posteriores de vacaciones.

Las leyes que estipulan el control de las condiciones ambientales y de seguridad en los puestos de trabajo eran insuficientes, y el Gobierno careció de mecanismos eficaces para asegurar su cumplimiento. La ley establece que el trabajador que considere que su vida está en riesgo por condiciones peligrosas tiene derecho a negarse a trabajar en ese puesto o a participar en ciertas actividades hasta que esos riesgos se eliminen. El trabajador sigue obligado a trabajar temporalmente en cualquier otro empleo que se le asigne con el salario que disponga la ley.

La Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que era autónoma pero ilegal, notificó numerosas infracciones de las leyes sobre salud y seguridad en los lugares de trabajo de todo el país, entre ellas, las que regularían las deficiencias y mal estado de conservación de la maquinaria y el equipo de protección. La CTC rara vez informaba a los trabajadores de sus derechos y no atendía ni asistía a los obreros que se quejaban de condiciones peligrosas en el trabajo.